**AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO CINCO DE ARRECIFE**

**DON CARLOS RONDA MORENO**, Procurador de los Tribunales y de **DON FRANCISCO RODRIGUEZ-BATLLORI SANCHEZ**, según consta acreditado en las **diligencias previas nº 697/2008, pieza separada-08**, ante el Juzgado, como mejor proceda en Derecho, **DIGO**:

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 634 y ss. de la LECr., intereso el **SOBRESEIMIENTO LIBRE** y el archivo de las diligencias en base a las siguientes manifestaciones:

**INTRODUCCION**

**1.-De las circunstancias personales de mi representado y su detención.**

Mi representado, don Francisco Rodríguez-Batllori Sánchez, es, o ha sido, un personaje público en el ámbito político y empresarial de Canarias, tras haber desempeñado durante los últimos veinticinco años los siguientes cargos públicos:

a) Gerente de la empresa pública denominada “Guaguas Municipales”, de Las Palmas de Gran Canaria.

b) Gerente del Polígono de Jinámar (Las Palmas).

c) Viceconsejero de Trabajo y Áreas Infradotadas del Gobierno de Canarias.

d) Consejero de Trabajo y Función Pública del Gobierno de Canarias.

e) Diputado en el Parlamento de Canarias.

f) Viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.

No se ha solicitado por esta parte prueba de los hechos anteriormente expuestos por ser de contenido público y no ser transcendentes para su defensa.

Tras abandonar mi representado la política se colegió en el Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas y comenzó a prestar sus servicios profesionales a quienes se lo demandaban.[[1]](#footnote-1)

El pasado día 23 de abril de 2010 mi representado fue detenido en su domicilio por efectivos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para su posterior puesta a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 5 de Arrecife de Lanzarote, dentro de la “Operación Jable”, del “Caso Unión”, que se instruye en ese Juzgado.

A pesar del teórico secreto de las actuaciones, la detención de mi representado y su posterior traslado en helicóptero desde Las Palmas de Gran Canaria hasta un lugar indeterminado de la isla de Lanzarote se llevó a cabo estando presentes los medios de comunicación, que filmaron y fotografiaron las escenas para su posterior divulgación a través de todos los medios informativos de la Comunidad Autónoma de Canarias y algunos otros de ámbito nacional, como los diarios “El Mundo” y “El país”. También se divulgó la noticia de la detención y el traslado en helicóptero en los informativos del canal autonómico andaluz “Canal Sur”, suponemos que para mayor escarnio de mi mandante, ya que es una persona conocida en las ciudades de Sevilla, Huelva y Cádiz, ciudades con las que mantiene estrechos vínculos por motivos familiares y profesionales.

Tras el levantamiento del secreto de las actuaciones esta representación pudo comprobar lo siguiente:

1. Los agentes de la Guardia Civil con tarjeta de identidad profesional números W41014B y J83817Z (folio 1.422), solicitaron autorización judicial para la detención de mi representado y el resto de imputados.
2. A pesar de la petición efectuada por los citados agentes, SSª (señor Pamparacuatro), no acordó la detención de mi representado.
3. Los agentes de la Guardia Civil con tarjeta de identidad profesional números W41014B y J83817Z acordaron, sin autorización judicial, comisionar agentes para la práctica de la detención de mi mandante (folio 1423).
4. Tras ser detenido, mi representado no fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria, sino que, como hemos dicho, fue trasladado a Lanzarote en helicóptero, aterrizando en un lugar indeterminado delante de las cámaras de televisión.
5. Consecuentemente, solo pudo ser la Guardia Civil la que avisó a los medios de comunicación para que captaran y divulgaran tanto la detención como el traslado de mi mandante.
6. De los delitos imputados a mi representado y de la instrucción del procedimiento, se evidencia que fue detenido de manera totalmente innecesaria (bastaba una mera citación judicial como imputado), de la manera más denigrante posible y con la única finalidad de causar un daño personal, familiar y profesional, con clara vulneración de los preceptos legales aplicables.

Por tal motivo, mi representado se reserva el derecho de ejercitar en su momento las acciones legales que le asisten exigiendo las responsabilidades legales a que haya lugar por las circunstancias en que se produjo su detención que hemos reseñado y personas intervinientes en aquella.

1. Tras su detención mi mandante fue incomunicado durante dos días en las dependencias de la Guardia Civil en Teguise, antes de pasar a disposición judicial, en un calabozo de tres metros de largo por un metro y medio de ancho, con un rigor totalmente desproporcionado a sus circunstancias personales y a los hechos presuntamente delictivos que se le imputan pues ni existía el menor riesgo de fuga ni de ocultación de pruebas ni mucho menos de peligrosidad personal que le hiciera acreedor de dichas medidas de seguridad.
2. En las diligencias no consta que se haya llevado a cabo durante los dos días que estuvo detenido las dependencias de la Guardia Civil en Teguise ningún tipo de diligencia de averiguación que justificase su detención e incomunicación (salvo prestar declaración ante los agentes de la GC).

**2.- Hechos que, al parecer, motivaron la detención e imputación de mi representado.**

**A) Ayuntamiento de Arrecife:** En el atestado de fecha 19 de enero de 2010, número 2010-005605-00000009 (folios 1368 y ss.), los agentes de la Guardia Civil con tarjeta de identidad profesional números W41014B y J83817Z consideran, en síntesis, que mi represento ha prestado servicios profesionales para el coimputado don Dimas Martín Martín y que éste le ha abonado sus honorarios a través del Ayuntamiento de Arrecife, influenciado en don José Miguel Rodríguez Sánchez, concejal de hacienda del Ayuntamiento de Arrecife, para que ese Ayuntamiento de Arrecife pagase a mi mandante facturas por servicios no prestados a esa Corporación.

Atendiendo a las diligencias, ese es el motivo por el cual la Guardia Civil, sin autorización judicial, detiene a mi representado, ya que en los diferentes atestados obrantes en las diligencias nada se indica respecto a las cantidades percibidas por mi mandante de la entidad INALSA.

**B) INALSA**: Expusimos en nuestro escrito de fecha 027 de junio de 2012 que en el auto de fecha 22 de febrero de 2010 (folio 1323) se dice que no consta la existencia de irregularidad alguna respecto a las cantidades percibidas por mi mandante de esa entidad. También expusimos en ese escrito que resulta llamativo que 15 días después de dictarse ese auto de fecha 22 de febrero de 2010 (folio 1323), don Andrés Barreto Concepción, concejal del Ayuntamiento de Arrecife, presentase escrito ante la Fiscalía denunciando, en síntesis, que mi representado había cobrado cantidades de la entidad INALSA por servicios profesionales no prestados, acompañando a su denuncia las facturas emitidas por mi mandante y cobradas de esa entidad (folios 1545 y ss.).

Tal actuación por parte del Sr. Barreto y la coincidencia de fechas que acabamos de reseñar, resulta, cuando menos, sospechosa respecto a la rectitud de sus intenciones en su afán de colaboración con la justicia, hasta el punto de que solamente se le despertó dicha inquietud con posterioridad a la notificación a las partes del auto judicial de 22 de febrero de 2010 a que hacemos referencia, sospecha que se acrecienta si tenemos en cuenta que el denunciante/colaborador no se encuentra personado en las actuaciones.

Fue, por tanto una mera coincidencia su presencia en Fiscalía en ese momento. ¿Alguien le comunicó el criterio de S.Sª manifestado en la resolución judicial indicada respecto a la ausencia de irregularidades en el comportamiento de mi representado con la empresa pública Inalsa y le invitó a realizar la visita al representante del Ministerio Público? Y si esto fuera así ¿lo fue por mero altruismo o existen otras motivaciones menos loables?

**3.- Delitos imputados a mi mandante.**

En primer lugar, hemos de manifestar la extrañeza que nos ha producido la lectura del informe del Ministerio Fiscal de fecha 31 de enero de 2013 del que acabamos de tener conocimiento, en términos más propios de una sentencia que de un escrito de trámite, escrito/informe que, por cierto, no está previsto en la vigente L.E.Cr., siendo competencia exclusiva del Instructor la transformación del procedimiento cuando “a su criterio” (art. 780 de la L.E.Cr.) considere la instrucción de la causa terminada y la existencia de indicios suficientes de criminalidad respecto de las personas imputadas.

Aun cuando no sea este el momento procesal oportuno ni para que el Ministerio Público formule su calificación provisional de los hechos imputados y delitos presuntamente cometidos, ni en consecuencia para que las defensas rebatan tales acusaciones si en cambio hemos de manifestar nuestra absoluta disconformidad con el contenido de dicho informe del que parece desprenderse que se considera a mi representado autor de un delito de falsedad en documento mercantil, en su modalidad de continuación delictiva y a las otras personas imputadas en esta pieza separada nº 8 autoras de sendos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

No pueda dejar de sorprendernos que el Ministerio Público, garante de la legalidad en virtud de su propio Estatuto, omita toda referencia a las diligencias de Instrucción practicadas (que no de prueba como repite en su escrito en varias ocasiones, siendo éstas reservadas como es sabido al acto del juicio oral) a instancia de esta defensa en las que se desvirtúa con rotundidad la tesis de la acusación al aseverar los testigos aportados en sus declaraciones que el imputado Sr. Rodríguez Batllori realizó efectivamente numerosas gestiones propias de su condición de Letrado en ejercicio en representación tanto del Ayuntamiento de Arrecife como de la empresa pública Inalsa ante distintas personas y organismos, por las cuales se devengaron como es lógico los honorarios percibidos de aquellas.

**4.-De lo que parece la “evolución” de la imputación.**

Tras la prolija prueba práctica a instancias de mi representado y que más adelante será analizada, parece, por las preguntas formuladas por SSª y el fiscal a los testigos e imputados, que ya no se duda de que mi representado haya efectuado trabajos para el Ayuntamiento de Arrecife e INALSA. La impresión que se ha causado a esta parte (seguramente errónea) es que lo que se discute es si el trabajo realizado es de tipo jurídico o no, si el importe de las minutas es elevado en relación a los trabajos realizados; la utilidad del trabajo; y la adecuación, o no, de la contratación del mi representado al derecho administrativo de aplicación.

Y en ese sentido, la sensación que se percibe (seguramente errónea), dicho con todos los respetos y en estrictos términos de defensa, es que no se persiguen hechos supuestamente delictivos, sino que se persiguen personas, y que en esa persecución se intenta evitar la realidad de los trabajos realizados por mi mandante, haciendo preguntas, tanto SSª, como el fiscal, con las que se transmite la sensación (seguramente errónea) de que se intenta “levantar piedras” con la esperanza de encontrar algo que justifique no solo una hipotética acusación, sino también las escandalosas circunstancias, ya mencionadas, que rodearon la detención de mi mandante y el haber mantenido el secreto de las actuaciones durante dos años.

Y es que plantear a los testigos que se reunieron con mi mandante por asuntos del Ayuntamiento e INALSA, preguntas tales como: ¿tomaba notas el señor Rodríguez-Batllori en las reuniones?, ¿cuánto tiempo duraban las reuniones?, ¿o qué aportaba el señor Batllori en esas reuniones?, dan la sensación de querer buscar un motivo para no aceptar la evidencia del trabajo realizado.

Esperamos estar equivocados y haber interpretado de manera errónea el objeto de esas preguntas, entre otras muchas.

**6.- Hechos y fundamentos de derecho que motivan la petición de sobreseimiento.**

Atendiendo a los antecedentes expuestos, a continuación se desarrollaran de manera pormenorizada los motivos que fundamentan la solicitud de sobreseimiento, y que, en síntesis, son los siguientes:

1. Realización efectiva de trabajos que justifican el cobro de las cantidades percibidas del Ayuntamiento de Arrecife e INALSA.
2. Diferencia entre prevaricación y nulidad/anulabilidad del contrato administrativo.
3. Presunción de inocencia. Doctrina legal e Inexistencia de pruebas de cargo.

**PRIMERA.-** **Realización efectiva de trabajos que justifican el cobro de las cantidades percibidas del Ayuntamiento de Arrecife e INALSA. Análisis de la prueba practicada.**

**1.-Objeto de la prueba.**

Tal y como advertíamos en nuestro escrito de fecha 4 de junio de 2012, el objeto de la prueba practicada a instancias de mi mandante ha tenido por objeto acreditar su contratación por el Ayuntamiento de Arrecife y por INALSA como asesor, así como la prestación de los servicios que le fueron requeridos, entendiendo que con ello se justifica que el cobro de las cantidades percibidas no eran, en ningún modo, por trabajos no realizados y, menos aún, en concepto de pago de un supuesto asesoramiento prestado a don Dimas Martín Martín.

**2.- Análisis de la prueba testifical solicitada por mi mandante.**

A continuación analizaremos la prueba testifical practicada diferenciando, para una mayor claridad expositiva, entre testigos referentes al Ayuntamiento de Arrecife y testigos referentes a INALSA.

**2.1) Testigos referentes al Ayuntamiento de Arrecife:**

**a)** Doña María José Docal Serrano, Consejera del Cabildo de Lanzarote:

La testigo manifestó que en el año 2008 presentó a los Concejales del PIL en el Ayuntamiento de Arrecife al señor Rodríguez-Batllori, con la finalidad de que pudieran contar con su asesoramiento para cuestiones relativas a sus cargos en ese Ayuntamiento.

La declaración de la testigo coincide con las manifestaciones realizadas por los coimputados don Miguel Ángel Rodríguez y doña María Luisa Blanco, y que posterioridad serán también abordadas.

Por tanto, ya encontramos la primera evidencia (presunción de inocencia) de la contratación de los trabajos que posteriormente fueron realizados por mi mandante.

**b)** Don Domingo Berriel Martínez, Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias:

En síntesis, el testigo manifestó que en febrero de 2009 mi representado se reunió con él para tratar dos temas relacionados con el Ayuntamiento de Arrecife, por un lado el “Vertedero de Argana” y, por otro el PGOU.

Tras el reconocimiento del señor Consejero del Gobierno de Canarias, el señor Fiscal realizó una serie de preguntas que, al parecer, tenían por objeto intentar poner en duda que mi mandante representase en esa reunión al Ayuntamiento, así como sus conocimientos en materia de urbanismo.

El planteamiento es absurdo por lo siguiente:

-¿Alguien puede creer que mi representado se le ocurrió pedir cita a un consejero del Gobierno de Canarias, e inventarse que trabajaba para el Ayuntamiento de Arrecife para preguntarle por un vertedero y el PGOU? No tiene sentido.

-Lo importante de la testifical es, aplicando el sentido común y a estos efectos, la prestación de un servicio ante un Consejero del Gobierno de Canarias y no los conocimientos de urbanismo de mi mandante (por los que preguntó el Fiscal), ni si tomó notas en la reunión, ni si aportó algún informe, ni si se presentó, o no, como abogado o asesor del Ayuntamiento (diferencia ridícula que planteó el fiscal). Lo relevante, insisto, es que prestó un servicio relacionado con el Ayuntamiento de Arrecife susceptible de ser remunerado, con independencia de su resultado o utilidad.

Por tanto, del contenido de la prueba que menos que presumir (presunción de inocencia) que alguien del Ayuntamiento de Arrecife encomendó a mi representado asesorarse ante el Consejero sobre las circunstancias y tramitación del “Vertedero de Argana” y el PGOU.

**c)** Don Javier Sánchez Simón, Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en 2008 y 2009:

En síntesis, el testigo declaró que con ocasión de la construcción de un Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) en las instalaciones de la Autoridad Portuaria en Arrecife se celebraron al menos cuatro reuniones a las que asistieron representantes del Ayuntamiento de Arrecife, del Cabildo de Lanzarote y de la Cámara de Comercio de Lanzarote; y que por el Ayuntamiento de Arrecife comparecía mi mandante.

Tras el reconocimiento efectuado por el testigo el señor Fiscal realizó una serie de preguntas que, al parecer, tenían por objeto intentar poner en duda que mi mandante representase en esa reunión al Ayuntamiento, así como la calidad o relevancia de las reuniones, diferenciando el fiscal entre “reuniones formales” y “reuniones informales”.

El planteamiento, nuevamente, es ridículo por dos motivos:

-¿Alguien puede creer que a mi representado se le ocurrió ir a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, inventarse que trabajó para el Ayuntamiento de Arrecife, e intentar “colarse” en alguna reunión relacionada con el Ayuntamiento? No tiene sentido.

-La diferenciación entre reunión formal e informal es, a estos efectos, simple y llanamente irrelevante. De la declaración del testigo se desprende la prestación de un servicio profesional ante el Presidente de una administración pública de la entidad de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y sobre una cuestión de indudable interés para la ciudad de Arrecife, y susceptible de ser remunerada, independientemente de que las reuniones se produjeran en el despacho del Presidente, en la Sala de Juntas, o en el cafetería de enfrente.

Por tanto, del contenido de la prueba que menos que presumir (presunción de inocencia) que alguien del Ayuntamiento de Arrecife encomendó a mi representado asistir a esas reuniones e intervenir en nombre del Ayuntamiento.

**d)** Don Emilio Atienzar Armas, Director General de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias en los años 2008 y 2009.

En síntesis, el testigo declaró que asistió a la reunión que mantuvo mi representado con don Domingo Berriel, Consejero del Gobierno de Canarias, y que a ella acudió mi representado en nombre del Ayuntamiento de Arrecife para tratar, con él en particular, “la gestión de residuos y el vertedero de Argana”.

Al igual que en los casos anteriores, tras el reconocimiento efectuado por el testigo de un trabajo realizado por mi representado para el Ayuntamiento de Arrecife, tanto Ss., como el señor Fiscal, realizaron una serie de preguntas que según nuestra opinión, tenían por objeto intentar poner en duda no ya la asistencia a esa reunión, sino su contenido, tales como su duración, quien la convocó, su complejidad técnica, y, otra vez, diferenciando, ahora SSª, entre reuniones formales e informales.

El planteamiento, nuevamente, es absurdo por lo siguiente:

- ¿Alguien puede pensar que mi representado fue a tratar la gestión de los residuos del Ayuntamiento de Arrecife con el testigo de “motu propio”, sin que nadie en el Ayuntamiento le encomendase esa gestión? ¿Se inventó mi mandante el problema del Vertedero de Argana? ¿Se inventó mi representado que el Ayuntamiento de Arrecife le encomendó asesorarse acerca de la manera de solucionas el problema medioambiental existente?

- De la declaración del testigo se desprende la prestación de un servicio profesional de mi mandante, que no queda desvirtuado por la duración de la reunión, ni por si se tomaron notas, ni de si mi mandante aportó un informe escrito o no. Lo relevante es la prestación de un servicio que necesariamente le tuvo que ser encomendado por el Ayuntamiento, sobre una cuestión de indudable interés para la ciudad de Arrecife, y susceptible de ser remunerada.

Por tanto, del contenido de la prueba que menos que presumir (presunción de inocencia) que alguien del Ayuntamiento de Arrecife encomendó a mi representado solicitar esa reunión e intervenir en nombre del Ayuntamiento.

**e)** Doña Emilia Perdomo Quintana, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arrecife en 2008 y 2009:

La testigo, tras reunirse en privado con SSª, el fiscal y el Secretario Judicial, antes de comenzar el interrogatorio, faltó a la verdad en su declaración al negar cualquier tipo de relación profesional con mi mandante, tal y como se evidenció con el interrogatorio de la testigo doña Inmaculada Acosta Artiles que a continuación se analiza.

Las circunstancias concurrentes en la declaración de esta testigo, que resultan de extrema gravedad tanto por su excepcionalidad como por sus consecuencias, serán en su momento investigadas por el Órgano a quien corresponda, pero resultan más propias de un procedimiento Inquisitorial que del vigente en un Estado de Derecho cuyas garantías resultan de aplicación aún en el caso de imputaciones de enorme gravedad, lo cual por cierto no se produce en el caso presente. ¿Qué conversación previa se necesitaba mantener con la testigo en privado y en ausencia de la defensa del imputado cuyo resultado fue que se le tomara declaración en dicha calidad de testigo y no en la de imputada como se nos había advertido previamente que iba a suceder? ¿Cuál fue el motivo que llevó a la testigo a negar la evidencia de las gestiones realizadas por mi mandante para la organización de los cursos del Essam y cual fue igualmente la causa del cambio de criterio de S.Sª para finalmente no imputarla en contra de lo que había manifestado a las partes en dependencias judiciales anteriormente?

Como prueba de la falsedad de las manifestaciones de la testigo negando la práctica de gestiones efectivas por parte de mi representado, debe recordarse que mediante carta sin fechar obrante al folio 1.405, mi representado escribe a don Dimas Martín, entre otros, lo siguiente:

*“Este lunes llamaré a la directora de ESSCAN que ha estado de baja como sanes para organizarle a Emilia la reunión preparatoria de los cursos sanitarios*”

¿O es que SSª piensa que mi representado organizó el curso sin que previamente se lo hubiese solicitado la Concejala? ¿Se ha tomado alguien la molestia de comprobar si efectivamente la Directora de ESSCAN estuvo de baja en las fechas de dicha carta y en consecuencia su texto hay que reputarlo como verídico en contra de las manifestaciones de la testigo?

**f)** Doña Inmaculada Acosta Artiles, Directora de la Escuela de Servicios Socio sanitarios (ESSCAN), en 2008 y 2009:

En síntesis, la testigo manifestó a preguntas de SSª que le llamó el marido de la Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias en aquella fecha y le solicitó que recibiese al mi representado y a doña Emilia Perdomo, Concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arrecife. Según la testigo, la reunión se convocó en abril de 2009 y, un día antes, mi representado la llamó para comunicarle que doña Emilia Perdomo no iba a poder asistir.

Por tanto, según la testigo, a la reunión asistió mi mandante y en ella le solicitó cursos de formación para personal del Ayuntamiento de Arrecife sobre asistencia domiciliaria, cursos que al final no se impartieron al no contestar la Concejala las llamadas de teléfono que se le hicieron para que aceptase el presupuesto que se le preparó.

Sorprendentemente y como novedad, el fiscal no preguntó a la testigo si mi mandante tomó notas en la reunión, ni si lo hizo con bolígrafo de tinta negra o tinta azul, ni si la reunión fue formal o informal, ni cuánto tiempo duró. Suponemos que porque hasta para él mismo quedó claro que mi mandante prestó un servicio para el Ayuntamiento de Arrecife susceptible de ser remunerado.

También suponemos que quedó claro para el señor Fiscal que mi representado acudió a esa reunión por encargo del Ayuntamiento de Arrecife, concretamente de la concejala doña Emilia Perdomo. De hecho, estamos convencidos de que el señor Fiscal no piensa que mi mandante es un demente que acudió a la reunión inventándose que la concejala Emilia Perdomo le había encomendado la gestión referida.

**g)** Don José Bernárdez Montero, arquitecto superior:

En síntesis, el testigo manifestó que en 2008 mi representado le comunicó que asesoraba al Ayuntamiento de Arrecife y que le ofreció integrarse con el equipo técnico que desarrollaba el PGOU de Arrecife. Que por ello asistió a una reunión en Costa Teguis a la que asistió mi mandante, el Concejal de Urbanismo, otro concejal que cree recordar que era el de Hacienda y don Dimas Martín, reunión que coordinaba mi mandante. Y que el proyectó finalmente no le interesó.

Por tanto, y salvo que SSª pretenda imputar un delito de falso testimonio al testigo, de su declaración se evidencia lo siguiente:

-Que mi representado fue contratado por el Ayuntamiento de Arrecife.

-Que mi representado prestó un servicio concreto y remunerable para el Ayuntamiento de Arrecife.

**2.2 Testigos referentes a INALSA**

**a)** Juan Carlos Betancort García, Presidente de FEMEPA:

En síntesis, el testigo declaró que en 2008 mi mandante se puso en contacto con él para comentarle que estaba trabajando para INALSA y le solicitó una reunión con la finalidad de que la patronal FEMEPA que él preside impartiese cursos de formación a la entidad INALSA. Que hubo al menos dos reuniones y varias conversaciones telefónicas, fruto de las cuales se impartieron cursos de formación.

Por tanto, de las diligencias de instrucción practicadas se desprenden elementos suficientes para ratificar lo expuesto en las declaraciones de mi representado en el sentido de que fue contratado y realizó diferentes gestiones por cuenta de la entidad INALSA por los cuales, como es evidente, se devengaron los honorarios correspondientes.

**b)** Don Roberto Acuña Armas, Jefe de Personal de INALSA:

Tras volver a leer la declaración del testigo no alcanzamos a comprender por qué SSª, de oficio, no ha planteado el sobreseimiento de las diligencias respeto a los delitos imputados en relación con INALSA.

Y es que el testigo, en síntesis, reconoció que en los años 2008 y 2009 el señor Rodríguez-Batllori trabajó con él en INALSA, asesorando en cuestiones laborales, de personal y de formación.

La declaración es tan contundente que no podemos sintetizarla sin perder matices muy esclarecedores, por lo que rogamos a SSª que se la vuelva a leer, y que, si tiene alguna duda, impute al testigo un delito de falso testimonio. De lo contrario no se justifica la imputación de mi mandante.

**c)** Don Juan José Cobo Plana:

Sobran presentaciones y menos aún poner en duda la credibilidad del testigo. Pues bien, en síntesis, el testigo manifestó que inicialmente se pusieron en contacto con él los concejales del PSOE en el Cabildo de Lanzarote para presentar el concurso de acreedores de INALSA. Que sabía que los concejales del PIL no estaban de acuerdo con la presentación del concurso. Que el señor Rodríguez-Batllori le pidió mantener una reunión, a la que asistió mi representado, don Dimas Martín y otras personas que no recuerda. Que en la reunión se trató el concurso de INALSA y en ella el señor Rodríguez-Batllori realizó preguntas de tipo jurídico y que como consecuencia de la reunión se acordó la presentación del concurso de INALSA.

Por tanto y una vez más, se evidencia que el señor Rodríguez-Batllori era asesor de INALSA. Si no, ¿qué hacía en la reunión?

**d)** Doña Rosario Mendoza Rosales, Jefa de Servicio de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias.

En síntesis, la testigo declaró que mi representado y una persona que pertenecía a RRHH de INALSA fueron a verla a su despacho para consultarle su opinión sobre determinadas cláusulas del convenio colectivo de INALSA.

Por tanto es razonable presumir (presunción de inocencia), que mi representado prestaba sus servicios profesionales a INALSA, salvo que SSª piense que mi representado es una persona precavida que se presentó ante la testigo inventándose que trabajaba para INALSA con la finalidad de tener una prueba a su favor en caso de ser detenido e imputado un año más tarde en base a la denuncia presentada por el tal Barreto.

**e)** Don Juan de Dios Fernández Lupiáñez, Jefe de la Inspección de Trabajo en 2008 y 2009:

En síntesis, el testigo declaró que mi representado le llamó por un tema de INALSA, concretamente por la posibilidad de presentar un ERE en una empresa en la que sus trabajadores acumulaban muchas horas extras.

Y del contenido de la prueba que menos que presumir (presunción de inocencia) que mi mandante prestaba sus servicios para INALSA, ya que no tiene sentido que le realizase esa consulta al testigo si no tenía relación alguna con esa entidad.

**f)** Don Adrián Mendoza Grimón, Director General de Energía:

En síntesis, el testigo declaró que se reunió en dos ocasiones con el señor Rodríguez-Batllori una reunión como “prestador de servicios jurídicos para INALSA, para tratar la deuda de INALSA con la entidad ENDESA (fraccionamiento y pago de la deuda), así como asesoramiento sobre una normativa muy compleja.

Al igual que en casos anteriores, SSª comenzó a preguntar al testigo sobre la duración de las reuniones, si eran formales o informales y si mi mandante tomaba notas en ellas.

Y con los debidos respetos a SSª, intentar poner en duda un trabajo efectivo realizado para INALSA susceptible de ser remunerado, en base a la duración de las reuniones o en base a si se tomaron notas o no, es, salvando las distancias, como si nosotros pusiésemos en duda que un juez ha trabajado por el mero de hecho de asistir a un breve interrogatorio sin realizar preguntas y sin tomar ningún tipo de apunte.

**g)** Don Pablo Casado Reboiro, Director General de ENDESA en Canarias:

En síntesis, el testigo manifestó que mi representado le solicitó una reunión a mediados de 2008 para tratar la deuda de INALSA con ENDESA, y que en esa reunión mi mandante se informó de que había sido contratado por INALSA para mediar en el pago de esa deuda.

Siguiendo la tónica general, SSª formuló una serie de preguntas al testigo que parecían intentar (al menos esa fue la sensación causada a esta parte) desvirtuar la prueba, como, por ejemplo, si mi mandante conocía el importe de la deuda de INALSA, el tiempo de duración de la reunión, si se volvieron a ver, etc.; quizás sin darse cuenta de que lo importante de la prueba es que con ella se acredita, o como mínimo se presume (presunción de inocencia), la contratación de mi mandante y la prestación de un servicio susceptible de ser remunerado. ¿O es que SSª creo que mi representado se enteró por la prensa de la deuda de INALSA con ENDESA? ¿Acaso cree SSª que mi representado fue a ver el testigo inventándose su contratación para pre constituir una prueba a su favor en caso de ser detenido e imputado dos años más tarde?

Si la hipótesis sostenida por la acusación pública fuera cierta, es decir, que la contratación del ahora imputado Sr. Rodríguez Batllori por parte de Inalsa no hubiera existido ¿Cómo podría entenderse que por parte de esta entidad no se hubiera denunciado y perseguido a quien, asegurando una representación de la que carecía, se personó en diferentes organismos y dependencias para interesarse por temas privados concernientes a la empresa? ¿Se ha formulado por INALSA alguna querella contra mi mandante por suplantación de personalidad, por usurpación de funciones, por fraude?

**3.-Análisis de la prueba documental aportada por mi representado en el momento de su detención.**

En el momento de su detención mi representado entregó a los agentes de la Guardia Civil la documentación a la que a continuación haremos referencia y que ha dado lugar al denominado “Informe sobre la documentación entregada voluntariamente por Francisco José Rodríguez-Batllori Sánchez con motivo de su detención”, emitido por el agente de la Guardia Civil con TPI V-79240T, con sello de entrada de fecha 14 de diciembre de 2011, folios 1561 y ss.

Los documentos que se analizan por el agente de la Guardia Civil con TPI V-79240T, relacionados con el Ayuntamiento de Arrecife e INALSA, son los siguientes:

1. Dosier con el anagrama de INALSA, sobre el Plan de Modernización.
2. Escrito de fecha 28 de mayo de 2008, emitido por Valentín Fernández Arrocha, Secretario General de la Sección Sindical de CC.OO., dirigido al Sr. Alcalde del AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE, solicitando la convocatorio de una Mesa General para que sea negociado el presupuesto general para el ejercicio 2008.
3. Escrito de fecha 27 de mayo de 2008, emitido por el Comité de Empresa del AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE al alcalde de dicho Ayuntamiento, referente a las negociaciones del Convenio y el acuerdo de los empleados públicos de la Policía Local de dicho consistorio.
4. Convenio Laboral al que están sujetos los empleados públicos del AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE.
5. Escrito de fecha 6 de febrero de 2007 emitido por el Secretario General de la Delegación del Gobierno de Canarias, Vicente Oliva Morales, dirigido al alcalde del AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE, relativo al acuerdo sobre propuesta de complemento específico de personal funcionario y laboral.
6. Escrito de fecha 23 de octubre de 2006, emitido por la Junta de Representantes del AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE, firmado por Victoria Armas Molina, dirigido a la alcaldesa del mismo, María Isabel Déniz, referente a la propuesta de modificación del complemento específico del personal funcionario …
7. Escrito de fecha 10 de octubre de 2006 emitido por el Interventor de Fondos del AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE, relativo al ajuste retributivo para los miembros de la plantilla de personal …
8. Escrito de fecha 23 de enero de 2007 por el que la Secretaria Accidental del Ayuntamiento de arrecife, Pilar Machín Henríquez, certifica que el pleno del AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE, (…) sobre la propuesta de complemento específico del personal funcionario y laboral de dicho Ayuntamiento.
9. Plan de Viabilidad y Modernización de INALSA.
10. Certificado emitido por Carlos Sáenz Melero, Interventor de Fondos del AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE por el que se relaciona el compromiso de una serie de gastos sobre actuaciones e infraestructuras …
11. Citación emitida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, dirigida contra el AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE, para que se presente el 14 de mayo de 2008 en las oficinas de la Inspección de Trabajo …
12. Orden del Consejero de Infraestructuras por la que se concede una subvención nominada de 1.500.000 € al AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE para actuaciones de infraestructuras.
13. Escrito de fecha 2 de octubre de 2007 por el que Enrique Pérez Parrilla, Alcalde del AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE solicita al Consejero de Obras Públicas …
14. Orden por la que se autoriza la prórroga del plazo de justificación de la subvención concedida al AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE …,
15. Escrito de fecha 29 de febrero de 2008 por el que Enrique Pérez Parrilla, Alcalde del AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE solicita al Consejero de Obras Públicas …
16. Escrito de fecha 27 de diciembre de 2006, en el que María Isabel Déniz expone al Consejero de Infraestructuras… Firma el documento Luis Morales Cabrera, Alcalde Accidental del AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE.
17. Fax de fecha 14 de mayo de 2008 enviado por don Dimas Martín a mi mandante, referente a la deuda de INALSA con ENDESA.

Estamos convencidos de que SSª se estará preguntando que hacía mi representado con toda esa documentación, referente a INALSA y al Ayuntamiento de Arrecife, si no les prestaba ningún tipo de servicio profesional.

Y la respuesta, que se obtiene aplicando un simpe y elemental razonamiento lógico, la facilitó mi representado en sus declaraciones ante la Guardia Civil y el Juzgado, en las que declaró una y otra vez que fue contratado como asesor de INALSA Ayuntamiento de Arrecife, declaraciones que, lógicamente, explican la tenencia de esos documentos y que, recordemos, fueron entregados espontáneamente en el momento de su detención, y no posteriormente, de manera reflexiva y a consecuencia del ejercicio de su legítimo derecho de defensa.

En definitiva, ¿se le ocurre a SSª algún otro motivo por el cual mi representado tuviese en su poder esos documentos? Por favor, no nos responda diciendo que se los bajó de internet, que todo tiene un límite.

**4. Análisis de la prueba testifical practicada de oficio.**

Llama la atención, por lo inusual en un asunto de tan poca relevancia, la cantidad de pruebas practicadas de oficio, sobre todo cuando el fiscal prácticamente no ha solicitado ninguna.

Y en ese sentido, SSª acordó el interrogatorio de los testigos que a continuación si dirá, dando la sensación (seguramente mal interpretada por esta parte) de querer encontrar pruebas que desvirtuasen la prueba practicada a instancias de mi representado.

Las pruebas testificales a las que nos referimos son las siguientes:

**a)** Don Juan Manuel González Rodríguez, Jefe de Administración de INALSA:

En síntesis, el testigo declaró lo siguiente:

-Que alguna vez vio a mi representado por las oficinas de INALSA, lo que al menos nos lleva a presumir la existencia de una relación profesional (presunción de inocencia).

-Que para el pago de las facturas emitidas por el señor Rodríguez-Batllori se seguía el mismo procedimiento que con el resto de proveedores.

-Que en relación con su certificado (folio 1854), no todas las personas físicas y jurídicas que en el aparecen tenían contrato escrito con INALSA a pesar de prestar servicios profesionales.

-Que por su cargo no tuvo relación con todos los proveedores de servicios profesionales referidos en su informe.

En definitiva, lo relevante de la prueba es lo siguiente:

-En nada desvirtuó la prueba practicada a instancias de la defensa.

-Se acreditó que era práctica habitual en INALSA que algunos profesionales prestasen sus servicios sin contrato escrito, los cuales, por cierto, no han sido ni detenidos, ni trasladados en helicóptero, ni imputados.

**b)** Don Enrique Pérez Parrilla, Alcalde de Arrecife en 2008 y 2009:

La declaración del testigo carece de interés, en tanto en cuanto manifestó que desconocía la contratación del mi mandante, salvo por lo siguiente:

-Reconoció que delegó en el imputado don José Miguel Rodríguez (concejal de hacienda) capacidad para contratar y efectuar pagos en nombre del Ayuntamiento.

-Reconoció que al estar el Ayuntamiento en esa fecha gobernado por el PSOE y el PIL, los concejales del PIL tenía autonomía propia dentro de sus funciones.

-Que es el interventor municipal quien debe velar por la legalidad de los pagos efectuados por el Ayuntamiento.

**c)** Doña Asenet Padrón Niz, doña María del Carmen Villaverde Ferreiro, doña Pilar Machín Henríquez y doña Sheila Aguiar Fernández, técnicos del Ayuntamiento de Arrecife:

Se ha agrupado a las cuatro testigos puesto que, en definitiva, vienen a decir algo que no es negado por esta parte y que es la inexistencia de contrato escrito entre mi representado y el Ayuntamiento de Arrecife. Si bien y a estos efectos, queremos destacar lo siguiente:

-Las facturas abonadas a mi representado venía intervenidas, como muestra de conformidad, por el Interventor Municipal.

-Doña María del Carmen Villaverde Ferreiro, técnico contable municipal que, según ella, *“en ocasiones sustituía al Tesorero y al Interventor”, reconoció que “a la hora de firmar la realización de pago, constaban los documentos contables y las cuatro facturas grapadas y firmadas. Que no era necesario un informe de necesidad. Que en aquella época no era necesario hacer constar el expediente de contratación vinculado a las facturas”.*

En todo caso se trata de un asunto de naturaleza administrativa que a abordaremos más adelante.

**5- Análisis de la prueba documental practicada de oficio.**

Realmente, de la prueba documental practicada de oficio no hay nada que destacar y de ella solo se llega a la conclusión de que mi mandante fue contratado por el Ayuntamiento de Arrecife e INALSA de manera verbal, lo cual no ha sido negado por esta parte.

En todo caso, se evidencia el gran interés que tiene SSª por encontrar pruebas que justifiquen la inocencia de mi representado, lo cual agradecemos.

**SEGUNDA.- Contenido material de los servicios prestados por mi representado. Adecuación al Estatuto de la Abogacía.**

**1.-Introducción.**

Ante la evidencia de los servicios prestados por mi representado tanto para el Ayuntamiento de Arrecife, como para INALSA, hemos adelantado que de las preguntas formuladas por SSª y Fiscal a los testigos se ha causado la sensación (seguramente errónea), de que se pone en duda es si el trabajo realizado es de tipo jurídico o no, si el importe de las minutas es elevado en relación a los trabajos realizados, la utilidad del trabajo y la adecuación o no de la contratación del mi representado al derecho administrativo de aplicación, cuestiones que para una mejor claridad expositiva se analizan a continuación pormenorizadamente:

**2. Naturaleza de los servicios prestados por mi representado.**

Rogamos a SSª que se lea el **Real Decreto 658/2001, de 22 de junio**, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española y los Estatutos para el régimen y gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas (al cual pertenece mi mandante), para darse cuenta que la labor de un abogado no se limita ni a asistir a juicios, ni a redactar contratos de arrendamiento. La función de un abogado no solo puede ser mucho más amplia, sino que, además, puede ser de mero contenido intelectual. Como ejemplo, un abogado que asesora telefónicamente a un cliente, sobre un asunto de cualquier naturaleza, realiza un trabajo amparado por la normativa referida que debe ser remunerado, con independencia de que ese asesoramiento se plasme posteriormente por escrito, o no.

Por otro lado, ni el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, ni los Estatutos para el régimen y gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas imposibilitan que un letrado pueda prestar un servicio a un tercero que no sea de contenido estrictamente jurídico y que cobre por ello. En todo caso, se trataría de una cuestión de contenido administrativo y/o disciplinario, en ningún caso delito.

**2.1 Naturaleza de los servicios prestados al Ayuntamiento de Arrecife.**

Las facturas emitidas por mi representado al Ayuntamiento de Arrecife son por los conceptos de “Asesoramiento y Colaboración” (folio 1407), lo que evidentemente engloba un concepto más amplio que el estrictamente jurídico.

Y dentro de esos conceptos están los siguientes trabajados realizados según la prueba practicada:

1. Tratar con el Consejero de Medio Ambiento del Gobierno de Canarias y uno de sus Directores Generales el PGOU de Arrecife y la problemática medioambiental generada por el vertedero de Argana.
2. Asistencia de a cuatro reuniones con el Presidente de la Autoridad Portuaria para tratar la construcción del Puesto de Inspección Fronteriza.
3. Asesoramiento a la concejala María Luisa Blanco en materia del personal.
4. Asesoramiento y gestiones para doña Emilia Perdomo Quintana, concejala de Servicios Sociales, ante doña Inmaculada Acosta Artiles, Directora de la Escuela de Servicios Socio sanitarios (ESSCAN), para la impartición de cursos de formación para personal del Ayuntamiento de Arrecife, sobre asistencia domiciliaria.
5. Asesoramiento en la tramitación del PGOU de Arrecife, asistiendo al menos a una reunión con el arquitecto superior don José Bernárdez Montero y el Concejal de Urbanismo.

Y si SSª entiende que es un delito que un abogado preste ese tipo de servicios y cobre por ello, SSª deberá imputar ese mismo delito al letrado que suscribe y, quizás, al 90% de los letrados en ejercicio.

**2.1.1 Importe de las cantidades facturadas (que no cobradas) del Ayuntamiento de Arrecife.**

Mi representado declaró ante SSª (señor Pamparacuatro), que fue contratado por el Ayuntamiento de Arrecife bajo la modalidad de “iguala” (aproximadamente 3.000 € bimestrales), lo que, en síntesis, consiste en un pago periódico por la prestación de los servicios que se le demanden de manera permanente, y que, en la práctica, significa que puede haber meses en los que se solicite mucho trabajo y otros en los que no. De esa manera el cliente (Ayuntamiento) contrata un servicio por un coste fijo y el abogado/asesor se asegura unos ingresos periódicos.

Ciertamente, la defensa de los concejales del Ayuntamiento don José Miguel Rodríguez Sánchez y doña María Luisa Blanco, también imputados, optaron por no responder preguntas del abogado de mi mandante, por lo que el hecho de no haber ratificado la contratación de mi representado bajo la modalidad de “iguala” debe de considerarse como parte de su estrategia de defensa.

Pues bien, de la documental obrante en las diligencias y de las declaraciones de los testigos técnicos del Ayuntamiento de Arrecife (prueba de oficio), se desprende que mi representado ha facturado (que no cobrado) durante el año 2008, la cantidad bruta aproximada de 12.000 € y la cantidad bruta aproximada de 7.000 € durante los seis primeros meses de 2009.

Ello representada la cantidad aproximada de 1.500 € mensuales, por lo que es evidente que no estamos antes cantidades desorbitadas o desproporcionadas que puedan dar lugar a cualquier tipo de suspicacia (el abogado don José María del Nido, Presidente del Sevilla Club de Futbol, facturó, según los medios de comunicación, tres millones de euros al Ayuntamiento de Marbella). Todo lo contrario, la cantidad facturada es más que habitual y, lógicamente, no es imputable a mi representado que el Ayuntamiento no le haya encomendado la prestación de más servicios durante ese periodo.

En todo caso, rogamos a SSª compruebe como el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, establece que los letrados pueden fijar libremente sus honorarios, lo que significa que mi representado puede ofrecer sus servicios al precio que considere conveniente.

**2.2** **Naturaleza de los servicios prestados a INALSA.**

Las facturas emitidas por mi representado a INALSA también son por los conceptos de “Asesoramiento y Colaboración” (folios 1547 a 1551), lo que en términos semánticos engloba un concepto más amplio que el estrictamente jurídico. Como excepción, las facturas de fechas 5 de diciembre de 2008 y 5 de febrero de 2009 (folios 1549 y 1550), añaden al concepto de “Asesoramiento y Colaboración” el concepto de “preparación de un plan integral de formación para el personal de la empresa”.

Y dentro de esos conceptos están los siguientes trabajados realizados según la prueba practicada:

1. Estudio y análisis del plan de reestructuración de INALSA.
2. Estudio y análisis del entonces vigente convenio colectivo.
3. Estudio y análisis de la denuncia del convenio colectivo.
4. Asesoramiento al Gerente y Jefe de Personal en materia de personal.
5. Asesoramiento para la utilización de los “Fondos de Formación Continua” para organizar cursos destinados a ese plan de reestructuración y adecuación del personal.
6. Varias reuniones con D. Javier Betancor Secretario General de la Federación del Metal (FEMEPA), para que su departamento de formación se encargara de impartir cursos de formación a la plantilla de INALSA
7. Frecuentes reuniones, con desplazamientos a Lanzarote, para asesorar al gerente Rafael Elorrieta y especialmente al Jefe de Personal, Roberto Acuña, en el transcurso de las negociaciones del convenio colectivo.
8. Organizar y participar junto al don Roberto Acuña, Jefe de Personal, a la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias a una reunión con la Jefa de Servicio de Normas y Convenios, Rosario Mendoza, para una consulta sobre una interpretación del convenio que modificada algún contenido del mismo.
9. Organización y participación en una reunión con el entonces abogado en ejercicio Sr. Cobo Planas para tratar de la situación concursal de Inalsa.
10. Consulta al Sr. Jefe de la Inspección de Trabajo D. Juan de Dios López acerca de temas laborales de Inalsa.
11. Reunión con Don Pablo Casado, Dr. Regional de Unelco-Endesa, para tratar de renegociar la enorme deuda que Inalsa mantenía con ella.
12. Reunión con el Dr. General de Energía del Gobierno de Canarias D. Adrián Mendoza para tratar cuestiones energéticas de Inalsa.

Y al igual que con el caso anterior, si SSª entiende que es un delito que un abogado preste ese tipo de servicios y cobre por ello, deberá imputar ese mismo delito al 90% de los letrados en ejercicio.

**2.2.1 Importe de las cantidades facturadas (que no cobradas) de INALSA.**

Mi representado declaró ante SSª (señor Pamparacuatro), que fue contratado por INALSA bajo la modalidad de “iguala” (aproximadamente 3.500 € bimestrales), siendo ello ratificado por el Gerente de INALSA señor Elorrieta.

Pues bien, de la documental obrante en las diligencias (folios 1547 y SS) se desprende que mi representado ha facturado (que no cobrado) durante el año 2008, la cantidad bruta aproximada de 12.000 €, incluyendo una primera minuta de 6.666 €, que incluye gastos por desplazamientos y la cantidad bruta aproximada de 7.000 € durante los seis primeros meses de 2009.

Ello representada la cantidad mensual aproximada de 1.500 €, por lo que es evidente que no estamos antes cantidades desorbitadas o desproporcionadas que puedan dar lugar a cualquier tipo de suspicacia. Todo lo contrario, la cantidad facturada es más que habitual y, lógicamente, no es imputable a mi representado que el Ayuntamiento no le haya encomendado la prestación de más servicios durante ese periodo.

Y al igual que con el Ayuntamiento de Arrecife, mi mandante ofrece sus servicios a cambio de la retribución que considera oportuna.

**TERCERA.- Contratos Administrativos. Procedimiento y formalidades.**

**1.- Introducción.**

A lo largo de la instrucción venimos reconociendo que mi mandante fue contratado por el Ayuntamiento de Arrecife y por INALSA mediante contrato verbal. Y si bien fundamentaremos a continuación que la contratación de mi representado se adecuó a la normativa administrativa de aplicación, también explicaremos, a efectos meramente dialécticos, que una contratación formalmente irregular (negada por mi mandante) en el ámbito administrativo puede dar lugar, en todo caso, a una infracción administrativa susceptible de ser anulada y no a la automática comisión de un delito de prevaricación (aparar en doble fila es una infracción administrativa, no un delito).

Por otro lado, la hipotética formalización irregular de un contrato administrativo no supondría nunca la pérdida o limitación al derecho a la justa contraprestación económica por el servicio objeto de contrato efectivamente prestado, según se establece en la jurisprudencia a la que más adelante haremos referencia.

**2.-Normativa de carácter administrativo de aplicación.**

En 2008, fecha en la que fue contratado mi representado por el Ayuntamiento e INALSA, la norma que regulaba los contratos suscritos por la administración era la **Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.** La versión inicial de esa Ley se mantuvo vigente hasta el día 16 de junio de 2009, fecha en la que fue parcialmente modificada por el RD 817/2009 de 8 mayo 2009. Tras sucesivas modificaciones fue derogada por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Por tanto, a continuación nos referiremos a la normativa vigente en la fecha de contratación de mi representado, es decir, a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y según su redacción original.

**3.- El contrato administrativo. Contratos menores. Procedimiento para la contratación.**

Dice el **artículo 2.1 de la Ley 30/2007**, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante “la Ley”) que: *“Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la presente Ley en la forma y términos previstos en la misma, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren los entes, organismos y entidades enumerados en el art. 3”.* Y entre los organismos a los que se refiere el artículo 3 se encuentran los ayuntamientos y las empresas públicas, que se son aquellas en donde el capital público es superior al 50 por ciento.

De la lectura de la Ley se constata la existencia de un procedimiento reglado al que debe acudir la administración para la suscripción de contratos con el sector privado y al que no vamos a hacer referencia, por ser de aplicación a la contratación de mi mandante la excepción prevista en el **artículo 122.3:**

*“****Los contratos menores podrán adjudicarse directamente*** *a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el art. 95.*

***Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos****, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 190 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.”*

Respecto a la manera de hallar la cuantificación del contrato, el **artículo 76.5** nos aclara lo siguiente:

*“En los contratos de suministro o de servicios que tengan un carácter de periodicidad, o de contratos que se deban renovar en un período de tiempo determinado, se tomará como base para el cálculo del valor estimado del contrato alguna de las siguientes cantidades:*

*a) El valor real total de los contratos sucesivos similares adjudicados durante el ejercicio precedente o durante los doce meses previos, ajustado, cuando sea posible, en función de los cambios de cantidad o valor previstos para los doce meses posteriores al contrato inicial.*

*b) El valor estimado total de los contratos sucesivos adjudicados durante los doce meses siguientes a la primera entrega o en el transcurso del ejercicio, si éste fuera superior a doce meses.”*

Consecuentemente, la contratación de mi representado pudo realizarse de manera directa, sin la tramitación de ningún tipo de concurso administrativo.

**4.-Formalizacion del contrato de servicios de carácter menor.**

Si bien la regla general es que los contratos administrativos deben estar documentados, también lo es que el artículo **140.2** **de la Ley, en relación con el art. 28.2,** establece la siguiente excepción:

*“En el caso de los contratos menores definidos en el art. 122.3 se estará, en cuanto a su formalización, a lo dispuesto en el art. 95”*

Y el **artículo 95.1 de la Ley** dispone lo siguiente:

*“En los contratos menores definidos en el art. 122.3, la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan”.*

Llegados a este punto cabe recordar el testimonio de **Doña María del Carmen Villaverde Ferreiro**, técnico contable municipal que, según ella, “*en ocasiones sustituía al Tesorero y al Interventor*”, y reconoció *que “a la hora de firmar la realización de pago, constaban los documentos contables y las cuatro facturas grapadas y firmadas. Que no era necesario un informe de necesidad. Que en aquella época no era necesario hacer constar el expediente de contratación vinculado a las facturas”.*

En el mismo sentido, **don Juan Manuel González Rodríguez**, Jefe de Administración de INALSA declaró lo siguiente: *“Que al venirle la factura autorizada la pagaba y nada más” y “que el sistema de pago seguido con el señor Rodríguez-Batllori era el mismo que el seguido con el resto de gestores[[2]](#footnote-2) de la entidad”.*

**POR TANTO, A LA FECHA DE CONTRATACIÓN DE MI MANDANTE NI ERA NECESARIO LA TRAMITACIÓN DE UN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN, NI ERA NECESARIO LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO EN DOCUMENTO ADMINISTRATIVO.**

**5.- Del Interventor Municipal.**

El **artículo 136 de la Ley 7/1985**, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que es el Interventor Municipal el órgano responsable del control y de la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria del Ayuntamiento.

El citado artículo tiene su reflejo en los **artículos 213 y ss. de la Real Decreto Legislativo 2/2004**, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, del que, a estos efectos, se destaca el **artículo 214:**

“1*. La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.*

*2. El ejercicio de la expresada función comprenderá:*

*a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores.*

*b) La intervención formal de la ordenación del pago.*

*c) La intervención material del pago.*

*d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.”*

Y tanto en su informe de fecha 13 de septiembre de 2012 obrante en las diligencias, como en su declaración ante el Juzgado como testigo, **doña María del Carmen Villaverde Ferreiro**, técnico contable municipal, manifestó que las facturas abonadas a mi representado habían sido previamente fiscalizadas por el Interventor Municipal, lo que al menos determina las siguientes presunciones:

a) Que mi representado fue contratado con el Ayuntamiento de Arrecife.

b) Que la contratación de mi representado se adecuó al derecho administrativo de aplicación.

c) Que los pagos efectuados a mi mandante se corresponden con servicios profesionales efectivamente prestados.

**6.-Criterio Jurisprudencial.**

**6.1- Atipicidad de los contratos administrativos irregulares.**

Sin perjuicio de lo expuesto y a efectos meramente dialécticos, la hipotética irregularidad en la formalización de un contrato administrativo no determina la automática comisión de un delito, sino que, y en todo caso, la incoación del correspondiente procedimiento de anulabilidad/nulidad contemplado en los **artículos 62 y ss. de la Ley 30/92,** de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siendo muestra del razonamiento expuesto la jurisprudencia que a continuación se cita:

-**AP Baleares, sec. 1ª, S 19-3-2012, nº 18/2012, rec. 68/2011 (EDJ 2012/33027):**

*“Por ello, un nutrido cuerpo de doctrina jurisprudencial indica que no es suficiente la mera ilegalidad, la mera contradicción con el Derecho, pues ello supondría anular en la práctica la intervención de control de los Tribunales del orden Contencioso- Administrativo, ampliando desmesuradamente el ámbito de actuación del Derecho Penal, que perdería su carácter de última ratio. El principio de intervención mínima implica que la sanción penal sólo deberá utilizarse para resolver conflictos cuando sea imprescindible. Uno de los supuestos de máxima expresión aparece cuando se trata de conductas, como las realizadas en el ámbito administrativo, para las que el ordenamiento ya tiene prevista una adecuada reacción orientada a mantener la legalidad y el respeto a los derechos de los ciudadanos. El Derecho Penal solamente se ocupará de la sanción a los ataques más graves a la legalidad, constituidos por aquellas conductas que superan la mera contradicción con el Derecho para suponer un ataque consciente y grave a los intereses que precisamente las normas infringidas pretenden proteger. De manera que es preciso distinguir entre las ilegalidades administrativas, aunque sean tan graves como para provocar la nulidad de pleno derecho, y las que, trascendiendo el ámbito administrativo, suponen la comisión de un delito. A pesar de que se trata de supuestos de graves infracciones del derecho aplicable, no puede identificarse simplemente nulidad de pleno derecho y prevaricación. En este sentido, conviene tener presente que en el artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común EDL 1992/17271 , se contienen como actos nulos de pleno derecho, entre otros, los que lesionen el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional; los dictados por órgano manifiestamente incompetente; los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento y los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta, lo que revela que, para el legislador, y así queda plasmado en la Ley, es posible un acto administrativo nulo de pleno derecho por ser dictado por órgano manifiestamente incompetente o prescindiendo totalmente del procedimiento, sin que sea constitutivo de delito ( STS núm. 766/1999, de 18 de mayo).”*

-**TSJ Comunidad Valenciana, sec. 1ª, A 27-11-2007, nº 62/2007, rec. 1/2007 (EDJ 2007/337983:**

*“En este sentido, la doctrina jurisprudencial, que podemos entender resumida en la STS 29-9-2004 EDJ 2004/143932 , indica que la prevaricación se concreta en el actuar del funcionario público dictando, a sabiendas, una resolución arbitraria. La función de control de la actuación funcionarial puede ser ejercida tanto por la propia Administración como por la jurisdicción, tanto en el orden contencioso administrativo como el penal, cuando la actuación del funcionario no sólo sea contraria a la norma, incluso ilegal, sino cuando, además, sea arbitraria, reservando ésta última a aquellos actos que infringen notoriamente los principios constitucionales de una Administración en un Estado democrático, esto es, cuando se vulneran abiertamente los principios constitucionales de imparcialidad, de igualdad de oportunidades, de legalidad, etc., que conforman la actuación de la Administración. Por ello, el sistema penal de control social sólo puede actuar frente a agresiones graves de los principios informadores de la actuación de la Administración, no contra meras irregularidades e ilegalidades que encontrarán su mecanismo de control en el orden contencioso administrativo , sino aquéllas que vulneran patentemente los principios de actuación básica de la Administración. El sistema penal tiene, en consecuencia, un carácter fragmentario y es la última ratio sancionadora y es por ello que el derecho penal no sanciona todas las conductas contrarias a derecho ni las que lesionan el bien jurídico, sino tan sólo las modalidades de agresión mas peligrosas, ya que su finalidad es atender a la defensa social que surge no de la simple infracción de la legalidad administrativa , lo que daría un sentido formalista al delito de prevaricación, sino la trasgresión o incumplimiento de la normativa administrativa que incida de forma significativa en los administrados y en la comunidad, con perjuicio potencial o efectivo en los intereses de ambos o de la causa pública.*

*La jurisprudencia también ha señalado criterios de diferenciación entre el ilícito administrativo , susceptible de corrección por la propia Administración y la jurisdicción administrativa , del ilícito constitutivo de delito. En la STS 28-11-94 , se afirma "debe alcanzar la categoría de manifiesta, insufrible para la armonía del ordenamiento jurídico que no soporta, sin graves quebrantamientos de sus principios rectores, que las Administraciones públicas se aparten de los principios de objetividad y del servicio de los intereses generales que le vienen impuestos por la Constitución. No se da por el simple hecho de que se hayan vulnerado las formalidades legales, ya que estos defectos deben y pueden quedar corregidos en la vía administrativa , el derecho penal sólo justifica su aplicación en los supuestos en los que el acto administrativo presente caracteres notoriamente contradictorios con los valores que debe salvaguardar y respetar".*

*En las STS de 2 de abril de 2003 EDJ 2003/25339 y de 24 de septiembre de 2002 , exige para rellenar el contenido de la arbitrariedad que la resolución no sólo sea jurídicamente incorrecta, sino que además no sea sostenible mediante ningún método aceptable de interpretación de la ley. Frecuentemente una situación como ésta ha sido calificada mediante distintos adjetivos ("palmaria", "patente", "evidente", "esperpéntica", etc.), o rotundamente incasable con el ordenamiento jurídico. En particular la lesión del bien jurídico protegido por el art. 404 CP EDL 1995/16398 se ha estimado cuando el funcionario adopta una resolución que contradice un claro texto legal sin ningún fundamento, para la que carece totalmente de competencia, omite totalmente las formalidades procesales administrativas , actúa con desviación de poder, omita dictar una resolución debida en perjuicio de una parte del asunto administrativo (STS 647/2002 EDJ 2002/12183 ).*

*Desde el punto de vista subjetivo, se hace necesario que la resolución injusta sea dictada a sabiendas de su obrar torticero y a sabiendas de su injusticia (STS 16-10-93 EDJ 1993/9143 ). El delito de prevaricación doloso, dictar a sabiendas de su injusticia una resolución arbitraria en asunto administrativo, supone "la postergación por el autor de la validez del derecho o de su amparo y, por lo tanto, la vulneración del Estado de Derecho" (STS 2/99, de 15 de octubre EDJ 1999/25736 ), lo que supone un grave apartamiento del derecho.”*

**-AP Burgos, sec. 1ª, S 6-6-2000, rec. 128/1998**(**EDJ 2000/52352):**

*“Por el Ministerio Fiscal se solicita la condena de la acusada al considerar que la conducta realizada por la misma se encuadra en el tipo penal de prevaricación, en forma continuada, previsto en el art. 404 del Código Penal EDL 1995/16398 , por su condición de funcionario público. Con carácter previo procede poner de manifiesto los requisitos jurisprudenciales en relación con el referido delito: A) Desde el punto de vista del sujeto activo, éste debe ser un funcionario público, en cuyo concepto está comprendida asimismo la autoridad B) El funcionario o autoridad debe dictar una resolución en asunto administrativo , que, ante todo, deba reputarse contraria a derecho, bien porque se haya dictado sin tener la competencia legalmente exigida, bien porque no se hayan respetado las normas de procedimiento en la génesis de la resolución, bien porque el fondo de la misma contravenga lo dispuesto en la legislación vigente o suponga una desviación de poder (sea cualquier acto administrativo que suponga una declaración de voluntad de contenido decisorio, que afecte a los derechos de los administrados y a la colectividad en general, bien sea expresa o tácita, escrita u oral S 346/1994, de 21 Feb. EDJ 1994/1533 ) C) No es suficiente, sin embargo, que una resolución sea contraria a derecho para que constituya un delito de prevaricación. B control de legalidad de los actos de la Administración corresponde, en principio, a la jurisdicción contencioso-administrativa y no sería compatible con una correcta articulación entre los poderes del Estado constitucional una sistemática criminalización de los actos de la Administración que estuviesen en contradicción con la Ley o implicasen desviación de poder, como acontecería si todo acto administrativo ilegal fuese considerado "injusto". Una resolución ilegal no es, sólo por ser ilegal, una resolución injusta. La injusticia supone un "plus" de contradicción con la norma que es lo que justifica la intervención del derecho penal. La jurisprudencia ha repetido últimamente rectificando una doctrina anterior excesivamente extensiva en la conceptuación de lo injusto, que únicamente cabe reputar injusta una resolución administrativa , a efectos de incardinarla en el tipo de prevaricación cuando la ilegalidad sea "evidente, patente, flagrante y clamorosa". (SSTS 17 de mayo 1992 , 20 de abril de 1995 EDJ 1995/2783 , 3 de Marzo de 1997 EDJ 1997/1533 , 3 de febrero de 1998 EDJ 1998/375 ) El CP 1995 en su art. 404 EDL 1995/16398 , identifica la injusticia de la resolución con su arbitrariedad. No parece sea del todo exacto que, con esta asociación, la Ley se haya limitado a ratificar la doctrina recientemente elaborada por el TS: en torno al art. 358 CP derogado EDL 1973/1704 . La identificación de la injusticia de una resolución con la mera evidencia de su ilegalidad ha puesto el acento en el dato de la fácil cognoscibilidad de la contradicción del acto con el derecho. Pero el art. 404 CP vigente EDL 1995/16398 ha puesto el acento en el dato, más objetivo y de fondo, del "ejercicio arbitrario del poder" proscrito por el art. 9.3 CE EDL 1978/3879 . Se ejerce arbitrariamente el poder cuando el funcionario dicta una resolución que no es efecto de la aplicación de la Constitución EDL 1978/3879 y del resto del ordenamiento jurídico a los que están sujetos tanto los poderes públicos como los ciudadanos según el art. 9.1 CE EDL 1978/3879 , sino, pura y simplemente, de su capricho, de su voluntad convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad. Cuando se actúa así y el resultado es una injusticia, es decir, una lesión del mejor derecho si la resolución ha de reconocerlo a uno u otro ciudadano o del interés colectivo si es éste el que está en juego se "pone" el elemento objetivo de la prevaricación. D) Ahora bien, para que el delito se entienda cometido, se requiere además que el funcionario actúe "a sabiendas" de la injusticia de la resolución que dicta. La expresión "a sabiendas" no sólo elimina del tipo en cuestión la posible comisión culposa, sino también la comisión con dolo eventual. El delito de prevaricación previsto en el párrafo primero del viejo art. 358 EDL 1973/1704 admite tan sólo el dolo directo. Se comete, pues, cuando el funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa porque quiere este resultado y antepone su voluntad a cualquier otra consideración.”*

**6.2. Contratos administrativos verbales formalmente irregulares. Doctrina del Enriquecimiento Injusto.**

De existir algún tipo de irregularidad formal en la contratación de mi mandante, dígase a efectos de exposición teórica pues ya hemos constatado que no lo hubo, ello no desvirtuaría el derecho de cobro de mi mandante por cuanto, como tiene declarado la jurisprudencia, ello supondría un enriquecimiento injusto de la administración que incurrió en aquel defecto formal y que, sin embargo, se ha visto beneficiada por el servicio prestado.

Lo dice, incluso, en el caso de contratos de obras la **Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 10 de noviembre de 2006 (El Derecho Jurisprudencia 2006/390736):**

*“Acreditada la realidad de la obra realizada en exceso, la administración estaba obligada a pagar el coste de la misma, en virtud del principio del enriquecimiento injusto, sin que pueda oponer a ello la ausencia de alguna formalidad sólo a ella atribuible, puesto que si las obras fueron encargadas por el facultativo de la Administración, y éste no solicitó la correspondiente autorización al órgano de contratación, no puede aprovecharse la Administración de su propia omisión para no abonar al contratista las obras realmente ejecutadas”.*

Y el **TSJ Comunidad Valenciana Sala de lo Contencioso-Administrativo, 0sec. 5ª, S 31-1-2012, nº 40/2012, rec. 754/2009 (EDJ 2012/156793):**

*“Nos encontramos por tanto con una reclamación de cantidad que dice ser en virtud de un contrato cuya inexistencia es palmaria y, de haber sido verbal, su nulidad se desprende de lo expuesto, lo que no es óbice para proceder a su pago ya que, como señala la sentencia referida, el mismo procede en virtud del instituto del enriquecimiento injusto, dada la realidad de las obras en beneficio de la Administración demandada, extremo respecto al que no existe duda alguna, lo que supone la necesaria estimación en cuanto al principal reclamado”.*

**CUARTO.- Inexistencia de los delitos imputados.**

De las diligencias se evidencia que mi representado fue contratado verbalmente por el Ayuntamiento de Arrecife e INALSA y que ha percibido cantidades como contraprestación a sus servicios profesionales, y no como consecuencia de ningún tipo de confabulación delictiva que tuviera por finalidad malversar caudales públicos.

Por tanto la prestación efectiva de sus servicios determina la inexistencia de los elementos de los tipos delictivos que se le imputan.

**QUINTA.- Presunción de inocencia y principio “in dubio pro reo”. Doctrina Legal.**

Aun cuando somos conscientes de que reivindicación de la aplicación al imputado del derecho Constitucional a la presunción de inocencia debe efectuarse en el acto del juicio oral, tras la práctica o ausencia de prueba de cargo de suficiente entidad para desvirtuar dicho principio, hemos querido no obstante recogerlo en el presente escrito por cuanto en el caso que nos ocupa, la continuación del procedimiento contra mi mandante y su presencia en el juicio oral le va a representar, sin duda, una condena ya en si misma, la conocida coloquialmente como “pena de banquillo”.

En efecto, si como ya hemos dicho anteriormente, las circunstancias penosas de su injustificada detención tuvieron resonancia y publicidad a nivel nacional, cabe esperar igual tratamiento publicitario (si no mayor) en las diligencias procesales que en caso de seguir la postura sostenida por el Ministerio Fiscal quedarían pendientes de practicar, en especial la misma celebración del juicio oral.

A esta parte no le sirve de consuelo tener la seguridad de que la sentencia que en su día se dictara seria completamente absolutoria y con todos los pronunciamientos favorables si hasta entonces mi representado se ha visto repetida y gravemente afrentado con la difusión pública de su enjuiciamiento e imputación, recibiendo públicamente calificativos tales como “testaferro de Dimas Martin”.

El derecho a la presunción de inocencia se explica por el **Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 27/07/2009** (Sentencia: nº 849/2009, recurso de casación nº 11432/2008):

*“2.- Respecto al contenido y alcance de la garantía constitucional tenemos dicho en nuestra reciente Sentencia núm. 784/09 de 14 de julio, y reiterando lo dicho en las núms. 776/09 de 7 de julio, 714/09 de 17 de junio, 690/09 de 25 de junio, 622/09 de 10 de junio, 489/09 de 14 de mayo, 449/09 de 6 de mayo, 440/09 de 30 de abril, 331/2008 de 9 de junio, 625/2008 de 21 de octubre, 797/2008, de 27 de noviembre, 900/2008 de 10 de diciembre, 65/2009 de 5 de febrero, 225/2009 de 2 de marzo, 248/2009 de 11 de marzo y 242/2009 de 12 de marzo, para determinar si esa garantía ha sido desconocida, lo que ha de constatarse en primer lugar son las condiciones en que se ha obtenido el convencimiento que condujo a la condena. Esto exige que se examine si la aportación de los elementos de la discusión sobre la aceptabilidad de la imputación se efectúa desde el respeto al método legalmente impuesto, de suerte que los medios de prueba sean considerados válidos y el debate se someta a las condiciones de contradicción y publicidad.*

*En segundo lugar, como también indicábamos en aquellas resoluciones, y como contenido específico de este derecho fundamental a la presunción de inocencia, deberá examinarse si, prescindiendo del grado de seguridad que el Juez tenga sobre el acierto de su convicción, ese método ha llevado a una certeza objetiva sobre la hipótesis de la acusación. No porque se demuestre una verdad indiscutible de las afirmaciones que funda la imputación. Sino porque, desde la coherencia lógica, se justifique esa conclusión, partiendo de proposiciones tenidas indiscutidamente por correctas.*

*Para constatar el cumplimiento de este específico presupuesto de enervación de la presunción constitucionalmente garantizada han de verificarse dos exclusiones:*

*La primera que la sentencia condenatoria -única respecto de la cual adquiere sentido discutir la garantía de presunción de inocencia- no parte del vacío probatorio, o ausencia de medios de prueba, que aporten proposiciones de contenido incriminador y sean válidamente obtenidas y producidas en el debate oral y público.*

*El vacío habrá sido colmado cuando, más allá del convencimiento subjetivo que el Juez, al valorar los medios de prueba, adquiera sobre la veracidad de la acusación, pueda estimarse, en trance de revisión, que no sustitución, de la valoración del Juez, que los medios que valoró autorizan a tener por objetivamente aceptable la veracidad de la acusación o, si se quiere, a excluir la mendacidad de la acusación.*

*La segunda la inexistencia de alternativas, a la hipótesis que justificó la condena, susceptibles de ser calificadas como razonables. Y ello porque, para establecer la satisfacción del canon de razonabilidad de la imputación, además, se requiere que las objeciones oponibles se muestren ya carentes de motivos racionales que las justifiquen de modo tal que pueda decirse que excluye, para la generalidad, dudas que puedan considerarse razonables.*

*Bastará, eso sí, que tal justificación de la duda se consiga, o, lo que es lo mismo, que existan buenas razones que obsten aquella certeza objetiva sobre la culpabilidad, para que la garantía constitucional deje sin legitimidad una decisión de condena. Sin necesidad, para la consiguiente absolución, de que, más allá, se justifique la falsedad de la imputación. Ni siquiera la mayor probabilidad de esa falsedad.*

*Puede pues decirse, finalmente, que cuando existe una duda objetiva debe actuarse el efecto garantista de la presunción constitucional, con la subsiguiente absolución del acusado. Sin que aquella duda sea parangonable a la duda subjetiva del juzgador, que puede asaltarle pese al colmado probatorio que justificaría la condena. Esta duda también debe acarrear la absolución, pero fuera ya del marco normativo de exigencias contenidas en el derecho fundamental a la presunción de inocencia». (F. J. 1º)”.*

De la doctrina expuesta se extraen las siguientes conclusiones:

1. Respecto a INALSA, no se ha practicado prueba alguna que desvirtúe la presunción de inocencia de mi representado. Todo lo contrario, de las diligencias se evidencia su contratación verbal y la prestación de servicios profesionales.
2. Respecto al Ayuntamiento de Arrecife, de las diligencias se constata que no es cierto que mi representado haya percibido cantidades de esa Corporación en pago de servicios profesionales prestados a don Dimas Martín y, menos aún, que éste haya presionado al Concejal de Hacienda para que abonase las facturas de mi mandante por servicios profesionales ficticios.

En cuanto al principio jurisprudencial "in dubio pro reo", la **AP Madrid, sec. 23ª, S 1-7-2009, nº 93/2009, rec. 38/2007 (EDJ 2009/162409);** expone lo siguiente:

*“La doctrina especializada ha señalado cómo, el que la insuficiencia de la prueba conlleve, por imperativo del derecho fundamental a la presunción de inocencia, la absolución del acusado, no supone que el principio "in dubio pro reo " carezca ya de ámbito de aplicación. Mientras que el "in dubio pro reo " parte de la existencia de la duda y vincula directamente la incertidumbre ("in dubio ") con la decisión favorable ("pro reo "), con la presunción de inocencia la duda se convierte en "un imposible jurídico" la absolución en virtud de la aplicación de la presunción de inocencia no se basa en la duda, sino en la certeza de la inocencia. Cosa distinta es que la mayoría de los supuestos de incertidumbre son consecuencia de la insuficiencia de la actividad probatoria desplegada en el juicio y que, debido a ello, entra en juicio la presunción constitucional de inocencia. Pero existen otros casos en los que la incertidumbre no versa sobre los hechos de la pretensión punitiva, ni sobre la participación del acusado en los mismos, sino sobre otros extremos distintos sobre los que despliega su eficacia la presunción de inocencia (por ejemplo, respecto de las circunstancias eximente o atenuantes). En estos casos, parece también fuera de toda duda que juega con toda su extensión el principio "in dubio pro reo " y que, en caso de incertidumbre, la apreciación de eximentes, atenuantes, error de prohibición, etc., puede ser consecuencia directa del principio "in dubio pro reo ".*

Y de la prueba practicada que menos que apreciar la duda razonable de que mi representado prestó tanto al Ayuntamiento de Arrecife, como a INALSA, servicios profesionales. No considerarlo así carece de sentido aplicando un simpe razonamiento lógico, ya que no es lógico que mi mandante haya realizado los servicios acreditados con la prueba testifical practicada si ello no era dentro del marco de una relación profesional.

**SEXTA. Conclusiones Finales.**

Para finalizar y como resumen de lo expuesto, esta parte considera que tras la dilatada fase instructora y volumen de las diligencias practicadas, los indicios de criminalidad que pudieran existir en su inicio contra mi mandante no se han ratificado como para poder sustentar la continuación del procedimiento y la celebración del juicio oral, salvo que se pretenda agravar el escarnio público ya inicialmente producido con su detención.

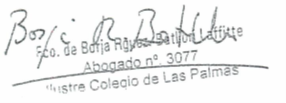
En efecto, el Tribunal Supremo al definir la naturaleza de los “indicios de criminalidad” tiene repetidamente afirmado en resoluciones judiciales de todos conocidas que aquellos deben consistir “en algo más que una probabilidad pero menos que una certeza”. Pues bien, tras las diligencias practicadas ¿hemos de aceptar que la tesis acusatoria respecto a mi representado sea algo más que una mera, ya no probabilidad, sino incluso hipótesis?, ¿mienten todos los testigos que afirman lo contrario?, ¿o por el contrario realizó tales gestiones por propia iniciativa, sin que nadie le hubiera encomendado su práctica?, ¿o es que tenía algún tipo de obligación de trabajar por cuenta de dichas entidades de forma gratuita?

La imposibilidad de contestar a las preguntas anteriores de forma afirmativa debe llevar al convencimiento de que su declaración se ajusta a la realidad, la tesis acusatoria no ha sido refrendada a lo largo de más de dos años de instrucción y varios miles de folios de diligencias y por tanto, en ausencia de elementos suficientes para sustentar de forma proporcionada dicha acusación, procede en aplicación de los preceptos indicados, decretar el sobreseimiento libre de las actuaciones y el archivo de las diligencias que conforman la presente pieza separada.

En su virtud

**SUPLICO AL JUZGADO** que teniendo por presentado este escrito, lo admita, y en base a su contenido dicte resolución en la que se disponga el sobreseimiento de las diligencias y archivo de las mismas, por no existir contra mi representado indicios de criminalidad suficientes que puedan apoyar la transformación del procedimiento y posterior celebración del juicio oral.

En Las Palmas, a 12 de febrero de 2013



1. Del contenido de las diligencias se evidencia que no se ha puesto en duda que mi representado es abogado adscrito al ICALPA. [↑](#footnote-ref-1)
2. En el acta de su declaración se recogió por error inadvertido “gestores”, cuando la pregunta y respuesta se refería a “proveedores”. [↑](#footnote-ref-2)